Una innecesaria elección judicial

An Unnecessary Judicial Election

F. Fabian Espinoza Valencia

Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático (FIADI)

Academia Boliviana de Derecho e Informática (ABDI)

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Bolivia

<https://orcid.org/0000-0002-7682-2102>

fespinoza@ucb.edu.bo

Revista de Derecho de la UCB – UCB Law Review, Vol. 9 N° 16, abril 2025, pp. 321-339

ISSN 2523-1510 (en línea), ISSN 2521-8808 (impresa).

DOI: <https://doi.org/10.35319/lawreview.202516123>

Recibido: 14 de febrero de 2025 • Aceptado: 16 de abril de 2025

Resumen

Bolivia en 2011 ha sido el primer país en el mundo en llevar a cabo un proceso de selección de autoridades judiciales a través del sufragio universal. La etimología de la palabra “democracia” alude al *poder del pueblo*; sin embargo, en la práctica, el *poder estatal* se antepone a la voluntad soberana. La administración de justicia no precisa de la aquiescencia de la ciudadanía; en múltiples ocasiones a la justicia le corresponde adoptar decisiones impopulares. La estructura Montesquiana procura un sistema dinámico y equilibrado de pesos y contrapesos, en el que *el poder controla al poder*.

En este contexto, el Órgano Legislativo llevó a cabo todo el proceso a través de una ley especial, con observaciones de forma y fondo. Dicha gestión se desarrolló de manera accidentada, evidenciando deficiencias normativas, tecnológicas, económicas, sociológicas y hasta psicológicas. Además, se gestó la figura de la *autoprórroga*, mediante la cual determinadas autoridades prolongaron el ejercicio de sus cargos más allá del periodo constitucionalmente

establecido. Se describe la problemática como un fenómeno desde el derecho económico, en el cual opera un principio democrático con determinadas peculiaridades, orientado a esbozar la figura de *bienestar judicial*.

Palabras clave: Democracia, justicia, jueces, elecciones judiciales, meritocracia, derecho económico, autoprórroga, bienestar judicial.

Abstract

In 2011, Bolivia became the first country in the world to conduct a process of selecting judicial authorities through universal suffrage. The etymology of “democracy” refers to the power of the people; however, in practice, state power often prevails over sovereign will. The administration of justice does not require the acquiescence of citizens; in many cases, justice must adopt decisions that are unpopular. Under the Montesquieuan model, a dynamic and balanced system of checks and balances is intended, whereby power is controlled by power.

In this context, the Legislative Branch conducted the entire selection process through a special law, which raised substantive and procedural concerns. This process was conducted in a haphazard manner, describing normative, technological, economic, sociological, and even psychological deficiencies. Among the irregularities observed, the emergence of the phenomenon of self-extension by authorities beyond their constitutionally mandated terms stands out. The issue is described as a phenomenon within the framework of economic law, wherein a democratic principle operates with certain peculiarities, aiming to outline the concept of judicial welfare.

Keywords: Democracy, justice, judges, judicial elections, meritocracy, economic law, self-extension, judicial welfare.

---

1. Introducción

La etimología de democracia alude al *poder del pueblo*, sin embargo, desde una perspectiva epistemológicamente crítica, esta concepción no resulta enteramente precisa. La democracia tripartita establecida en la Constitución boliviana se revela, en este sentido, como una estructura aturdida.

El Órgano Judicial tiene la peculiaridad de impartir esta casi romántica acepción de justicia, que, en muchos casos, es impopular pero necesaria. Ejemplo de ello es la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1954, cuando declaró inconstitucional la segregación racial (*Brown v. Board of Education*, 1954), pese a la disconformidad de una amplia parte de la sociedad. La impartición de justicia reviste tal importancia que no basta con la sola implementación de mecanismos meritocráticos, pues estos pueden incorporar sesgos discriminatorios a favor de segmentos privilegiados que logran acceder a títulos académicos, pero que no necesariamente garantizan la probidad requerida para administrar justicia.

Por ello, es un despropósito que se pretenda democratizar de erráticamente la administración de justicia, la cual no debería encontrar su fundamento jurídico en la voluntad popular, ya que su legitimidad obedece a una arquitectura distinta, de naturaleza deontológica¹, que debe ser analizada. Como es conocido, la Asamblea Constituyente estableció en la Carta Magna la existencia de cuatro órganos, que en esencia mantienen los tres poderes tradicionales, añadiendo el Electoral. Los cuatro son órganos constituidos.

Esta estructura pseudoMontesquiana, pretende en síntesis instaurar un sistema dinámico y equilibrado de pesos y contrapesos, donde

1 La deontología es el conjunto de principios éticos y normas que regulan el ejercicio de una profesión, estableciendo los deberes y responsabilidades de quienes la practican. Se basa en valores como la integridad, la responsabilidad y la justicia, buscando garantizar una conducta profesional adecuada en beneficio de la sociedad.

el poder controla al poder. No obstante, esta premisa se aplica de manera algo caótica ante la disonancia existente entre la independencia de Poderes y la coordinación y cooperación entre Órganos. El presente artículo describe una serie de impertinencias de orden normativo, económico, sociológico y hasta psicológico observadas durante la tercera gestión de elecciones judiciales, un proceso que se prolongó por más de un año y que derivó en la denominada *autoprórroga* de los magistrados en el ejercicio de los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Conforme establece el parágrafo I del artículo 186 de la Constitución, el periodo de mandato de los magistrados es de seis años, es decir, concluía el 2 de enero de 2024. La situación descrita exige un enfoque deontológico para la adecuada comprensión de la problemática.

2. Marco teórico y estado del arte

2.1 Ley especial para el proceso de preselección

El Órgano Legislativo lleva a cabo el procedimiento de preselección conforme a lo establecido en la Ley especial 1549. Sobre dicha norma se han formulado diversas observaciones. La Ley regula las elecciones y garantiza el desarrollo del proceso, haciendo una mención expresa a la sentencia constitucional 0060/2023 de 31 de julio de 2023, mediante la cual, por unanimidad, los magistrados declararon:

- a) La inconstitucionalidad del Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023), así como la Convocatoria Pública emergente del mismo, ambos aprobados por la RALP 007/2022-2023, por ser contrarios a los arts. 109.II, 144.II y 410.II de la CPE;

- b) La inconstitucionalidad por conexitud de la Ley N°1513 de 5 de junio de 2023 –Ley Transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura–; y,
- c) Exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a cumplir con las funciones y atribuciones constitucionalmente previstas; así como, contribuir en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de la preselección y elección de las máximas autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con carácter inmediato.

El artículo 4 de la Ley desarrolla una serie de principios, entre los cuales se destacan los siguientes. En relación al principio de equidad, se identifica un efecto contraproducente en el que, por hacer prevalecer dicho principio, se habilitó a candidatas mujeres reprobadas y a candidatos indígena originario campesinos, invocando para ello el parágrafo II del artículo 37 de la Ley mencionada.

Cuando hace alusión al principio de imparcialidad, cita que “Los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza (...)”. Sin embargo, un amparo constitucional promovido por al menos 37 registrados –según datos de la Fundación Construir (2024)– paralizó la totalidad del proceso, afectando derechos de terceros por decisión de únicamente dos autoridades jurisdiccionales. En la resolución correspondiente se identifican múltiples irregularidades:

- Se trata de un pronunciamiento *ultrapetita*², siendo una resolución que resuelve el amparo constitucional interpuesto por una candidata, pero la decisión determina dejar sin efecto el reglamento y, en consecuencia, afectar a todo el proceso y a todos los candidatos habilitados.

2 Es un vicio procesal en el que una resolución judicial otorga más allá de lo que ha sido solicitado por las partes. Proviene del latín que significa “más allá de lo pedido”.

- Se vulneró el derecho constitucional al trabajo, en particular el de los postulantes habilitados que, al momento de su postulación, ejercían funciones públicas a las que tuvieron que renunciar.
- Conforme lo establece el artículo 38 de la Ley 1549, la Asamblea Legislativa Plurinacional constituye la única instancia facultada para declarar desierta la convocatoria.
- Se transgredió el principio de preclusión establecido en el literal k) del artículo 2 de la Ley del Régimen Electoral, donde se enlistan los principios de la democracia intercultural como de observancia obligatoria.
- El amparo constitucional no es la acción idónea, porque, conforme a su naturaleza jurídica, es un mecanismo de defensa que tutela derechos individuales. Para la defensa de derechos colectivos —como los que involucran a todos los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional— corresponde la acción popular. Alternativamente, conforme lo establece el Código Procesal Constitucional, el recurso idóneo es el establecido en su artículo 139 contra de resoluciones del Órgano Legislativo.
- Conforme a las etapas y cronograma del proceso establecidos en la Ley, no se respetó el precepto y garantía constitucional de la irretroactividad de la Ley, consagrado en el artículo constitucional 123.

Sobre el principio de meritocracia, la Ley establece que quién postula debe reunir aptitudes, capacidad, trayectoria y méritos: cuatro características que combinan aspectos subjetivos y objetivos. Sin embargo, este principio indefectiblemente se contrapone a la esencia misma del proceso, en tanto que, si la selección de dichas autoridades se rigiera plenamente por el principio de meritocracia, resultaría innecesario recurrir tanto al voto de los asambleístas —en su calidad de representantes de la sociedad— como al voto popular posterior. El párrafo III del artículo 6 de la Ley establece, entre los mecanismos de comunicación y verificación electrónica, la utilización de WhatsApp, lo que resulta problemático, ya que

esta plataforma cuenta con servidores en el extranjero, contraviniendo la política pública de soberanía tecnológica, pilar de la Agenda Patriótica elevada a rango de ley mediante la Ley 650, de 15 de enero de 2015.

En cuanto a los mecanismos de transparencia previstos en los artículos 7 y 8, se instauran veedurías nacionales e internacionales; sin embargo, su intervención se limita a recibir informes y su lectura en el Pleno, prescindiendo de una participación eficaz. Respecto al mecanismo de impugnación previsto en el artículo 29, se observa una vulneración a los principios de imparcialidad y congruencia, dado que la misma Comisión Mixta que emite los pronunciamientos es la encargada de resolver las impugnaciones interpuestas en su contra. En tal sentido, a pesar de existir un recurso de revisión ulterior, los candidatos optaron por activar la acción constitucional de amparo. A ello se suma el recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 40 del Reglamento para la Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2024, incorporado dentro de la lógica del principio de subsidiariedad, aunque rodeado de diversos subterfugios ajenos al objeto del presente artículo.

Desde una perspectiva organizacional, cabe destacar que el Reglamento General de la Cámara de Diputados rige el tratamiento de los candidatos en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicho reglamento ha sufrido modificaciones relevantes³, sustituyéndose en varios artículos la exigencia de “dos tercios” por la de “mayoría simple”, en adecuación a la nueva composición mayoritaria del bloque oficialista, que ya no cuenta con dos tercios de los miembros. No obstante, debe señalarse que el parágrafo V del artículo 182 de la Constitución establece expresamente que los candidatos serán elegidos por mayoría simple de los votos.

3 Se ha realizado en 2020 a través de una resolución camaral.

2.2 Afectación desde el derecho económico

La tercera elección judicial en Bolivia, prevista inicialmente para el 1 de diciembre, experimentó un retraso superior a un año respecto del plazo establecido constitucionalmente. El proceso, cuyo costo total asciende a Bs 204.711.725, se caracteriza por diversas particularidades. Fue la tercera vez que se llevó a cabo estas elecciones, solo que esta vez no se eligió a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, pues mediante el auto constitucional 0084/2024-SA del TCP se ratificó la sentencia 0770/2024, también del TCP, que paralizó parcialmente las elecciones judiciales en cinco departamentos, permitiendo su continuación en los demás. Esta resolución limitó la elección de magistrados al TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, así como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, dejando a las autoridades de dichas jurisdicciones en situación de prórroga hasta la realización de nuevas elecciones.

Curiosamente, esa demora ha generado un incremento en el presupuesto total. El Órgano Ejecutivo había dispuesto en un principio un presupuesto de 183 millones de bolivianos para llevar a cabo el proceso electoral judicial. Sin embargo, a través del Decreto Supremo 5217, se incrementó el presupuesto de las subpartidas de consultorías a casi 205 millones de bolivianos.

Luego de un accidentado y prolongado proceso, la Asamblea preseleccionó a 139 candidatos:

- 69 (34 mujeres y 35 varones) para el TSJ;
- 36 (16 mujeres y 20 varones) para el TCP;
- 14 (7 mujeres y 7 varones) para el Tribunal Agroambiental, y
- 20 (10 mujeres y 10 varones) para el Consejo de la Magistratura.

Se preveía la elección de 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, 9 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, 5 magistrados para el Tribunal Agroambiental y 3 consejeros para el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el TCP, a través de

la sentencia constitucional 0770/2024-S4, ha determinado –sin precedentes– que el proceso electoral judicial fuera parcial, es decir, previendo la elección de únicamente 19 de las 26 autoridades.

Este fenómeno puede ser explicado, con un grado razonable de congruencia, desde el derecho económico, entendido como el “conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la actividad económica en una sociedad, permitiendo al Estado planificar y regular el desarrollo económico y social” (Vásquez, 1996).

Para el Profesor Munera Arango, su objetivo es promover la justicia social y la eficacia económica, garantizando que las actividades económicas se realicen de manera organizada y equitativa para el desarrollo integral de la sociedad. Desde esta óptica, las elecciones judiciales analizadas menoscaban la teleología del derecho económico, dado que resulta difícil justificar el elevado costo de casi Bs. 205 millones para un proceso electoral judicial cuestionado, que no logró superar el 65% de participación ciudadana. Un antecedente no menor, es que, en las últimas elecciones judiciales del 2017, más del 50% de los votos fueron nulos, lo que permite inferir que las autoridades electas –algunas siguen en el ejercicio del cargo– no gozan de una legitimidad plena. Sépase que, del Presupuesto General del Estado (PGE), el presupuesto destinado a la justicia no alcanza ni al 1% (Correo del Sur, 2025).

Mientras que, una agencia internacional de calificación crediticia ha rebajado la calificación del país de CCC a CCC- (El Deber, 2025). Esta degradación implica cinco consecuencias concretas:

- Riesgo Elevado de incumplimiento,
- Condiciones económicas vulnerables,
- Costos de financiamiento aumentados,
- Impacto en la inversión extranjera, y
- Comparación internacional desfavorable.

Estos factores se vinculan, a su vez, con el deterioro de la seguridad jurídica, situación que se ve agravada por procesos acciden-

tados, diferidos y parciales en la selección de las autoridades judiciales (BWRatings, 2023).

3. Metodología

El presente estudio adopta un enfoque metodológico mixto, combinando el análisis cualitativo con elementos cuantitativos, a fin de abordar la problemática con los contenidos desarrollados. La metodología empleada se basa en el análisis doctrinal, comparado y empírico, alineado con los enfoques metodológicos propuestos por autores como Atienza (1997) en el análisis del discurso jurídico y Peczenik (2008) en la argumentación y fundamentación del derecho.

El estudio es, específicamente, de carácter exploratorio y explicativo. En la dimensión cualitativa, se utiliza el análisis normativo y doctrinal para examinar las imprecisiones normativas y la legitimidad del sistema. En la dimensión cuantitativa se incluyen estadísticas sobre desempeño judicial y percepción ciudadana de la independencia judicial, siguiendo las directrices de Creswell (2014) sobre metodología de investigación mixta. Se han adoptado los métodos tradicionales correspondientes a: análisis normativo, doctrinal, comparado, empírico y crítico-cognitivo, aludiendo a Kahneman (2011) sobre pensamiento rápido y lento aplicado al ámbito de la administración de justicia.

3.1 Fuentes

Las fuentes utilizadas en este estudio se dividen en primarias y secundarias:

Fuentes primarias: Legislación boliviana, reglamentos de preselección, resoluciones judiciales y tratados internacionales sobre independencia judicial y selección de jueces.

Fuentes secundarias: Doctrina jurídica, estudios económicos sobre el impacto del sistema electoral en la justicia, análisis de po-

líticas comparadas y estudios en psicología cognitiva aplicada al ámbito judicial.

3.2 Delimitación del estudio

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentran la disponibilidad de datos empíricos sobre el desempeño de jueces electos en Bolivia y la falta de estudios psicológicos aplicados al contexto judicial boliviano. Para mitigar estas restricciones, se acude a fuentes indirectas y al análisis comparado con México, que es el otro país que adoptó el mismo sistema. Considerando el lapso desde el 16 de octubre de 2011, cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones judiciales, hasta el 15 de diciembre de 2024, fecha en la que se llevaron a cabo las últimas elecciones judiciales de manera parcial. Asimismo, se contemplan las fechas estimadas para completar el proceso electoral durante el año 2025, las cuales se encuentran incorporadas en el presente estudio.

4. Resultados

4.1 Principio democrático en cuestión

Opera, entonces, un principio democrático que encuentra su etimología en el derecho parlamentario, en el que, al momento de elaborar normas, debe haberse plasmado la manifestación de voluntad con un procedimiento público. Al aplicarse dicho principio como una regla idónea, y siguiendo el criterio de Biglino, citado por Punset, se advierte que

carece de concreción al margen de los preceptos que lo vivifican y desenvuelven (...) sin embargo, no cabe duda, que una vez así configurado, el principio democrático ha de presidir la interpretación, no solo de la totalidad del ordenamiento –en tanto que principio estructural del mismo– sino incluso de cada una de las normas constitucionales que contribuyen su perfilación y de las

cuales concluye por autonomizarse. El principio democrático es, en suma, el producto resultante de la interacción de su contenido cultural nuclear y de las normas que delimitan su dimensión precisa en nuestro Derecho (Punset, 1992).

Dicho precepto axiológico encuentra su adversidad en el alcance del instituto del *sufragio universal*, como una irracional ficción que, en principio es derecho, pero es más obligación, porque obliga al ciudadano a ejercer ese *poder*⁴ que detenta, pero de manera condicionada en un proceso electoral en el que desconoce verdaderamente el perfil meritocrático –desarrollado líneas supra– de los candidatos. Se presupone, erróneamente, que la ciudadanía conoce cabalmente la estructura del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Desde la etimología del término *democracia*, o poder del pueblo, puede advertirse una fisura casi irreparable entre su teleología y su aplicación práctica: el Estado manda y los ciudadanos acatan, con la intervención total o parcial de la fuerza en sus diferentes vertientes. La *voluntad del pueblo* se encuentra menoscabada por una sagaz *voluntad del Gobierno* que ha disuelto lo que históricamente se registraba como una victoria de la ciudadanía: los jueces ciudadanos.

Así se puede verificar en la contradicción en la que el mismo Órgano (Legislativo) que ha realizado el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales, es la misma entidad que, hace una

- 4 CPE, Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
  2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.
  3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

década atrás, socavó el axioma de implicar a la sociedad en la administración de justicia, considerado un triunfo histórico del sistema garantista.

Lo ha hecho específicamente el 30 de octubre de 2014, aprobando la Ley 586 de descongestión y efectivización del sistema del proceso penal, cuyo artículo 5 estableció que los Tribunales de Sentencia se constituirían por tres jueces técnicos, sustituyendo a la precedente figura que sostenía la figura de 3 jueces ciudadanos y 2 jueces técnicos, configurando así un cambio que profundizó las dificultades y erosionó un sistema ya caracterizado por su fragilidad. **La “tombola” Mexicana**

Es común afirmar que Bolivia es el único país en el mundo que actualmente lleva a cabo elecciones judiciales por voto popular, en un contexto en el cual todo indicaría que *el remedio es peor que la enfermedad*. Sin embargo, en 2024, los Estados Unidos Mexicanos han optado por esta cuestionada fórmula (USIP, 2024). Y más, porque el Congreso determinará las candidaturas del Poder Judicial a través de insaculación (Canal del Congreso MX, 2025), es decir, mediante un sorteo aleatorio de jueces para que sean posteriormente elegidos por la ciudadanía por sufragio universal.

Según las autoridades mexicanas, la insaculación es una herramienta que puede mejorar la legitimidad de las decisiones tomadas, pues la aleatoriedad del proceso hace que la selección dependa exclusivamente de un azar controlado y no de acuerdos o intereses políticos. Sin embargo, la insaculación también ha generado críticas, ya que algunos argumentan que un sistema completamente aleatorio podría no garantizar que los seleccionados sean los más capacitados para desempeñar el cargo, atentando de este modo contra la meritocracia.

5. Discusión

5.1 Mecanismo clasista

Se considera que la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional es clasista. Esto es así porque las autoridades jurisdiccionales de los estrados judiciales pertenecientes a los Tribunales Departamentales de Justicia –en las jurisdicciones civiles, penales, constitucionales, familiares, entre otras– son elegidas por el Consejo de la Magistratura y las vocalías, a su vez, por votos del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien en estos casos la elección se realiza mediante votos –presumiblemente más calificados–, no está sujeta a la *voluntad popular*.

En contraste, las altas autoridades judiciales son elegidas directamente por el *poder del pueblo*, aunque en un contexto de profundo desconocimiento. La ciudadanía vota entre candidatos cuyos méritos son difundidos únicamente por el Órgano Electoral, y de manera sumamente enunciativa y efímera, limitando de este modo el acceso real a información sustantiva que permita una decisión informada.

6. Conclusiones

6.1 Sesgos cognitivos

El profesor Nieva-Fenoll, sin falta de razón, afirma que:

El hecho es que pensamos, y afirmamos continuamente, que los jueces realizan una labor que, en realidad, no desempeñan (...) obsérvese que socialmente se atribuye una altísima fiabilidad a la intuición judicial para que valore correctamente pruebas que no están al auténtico alcance de la interpretación de los seres humanos, como sucede con los interrogatorios, salvo que se supongan capacidades

paranormales adivinatorias en los jueces, que desde luego no poseen (Nieva-Fenoll, 2025).

La noción es expresar que los jueces, formados en derecho, están obligados a *jugar* a ser expertos ante pericias de toda índole. *Todos nos fiamos de la intuición del juez*, asumiendo una sabiduría casi irrestricta, basados, quizá de manera sesgada, en sus méritos. A pesar de aquello, existen sesgos al momento de administrar justicia, en específico, sesgos cognitivos que, al haber sido elegidos por voto popular, se incrementan debido a que se aparta del máxime rector que son las *máximas de la experiencia* (Lluch, 2015).

6.2 “Bienestar judicial”

Un estudio australiano sugiere que al menos un tercio de los jueces debería ser evaluado por trastorno de estrés postraumático, debido a los altos niveles de angustia psicológica que experimentan, resaltando la necesidad de priorizar la óptima administración de justicia. En este marco, Dudley introduce un neologismo denominado “*bienestar judicial*”, que alude tanto a un estado de ánimo subjetivo como a la existencia de condiciones objetivas idóneas para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, condiciones que el voto popular no tiene capacidad efectiva de identificar (Dudley, 2024).

En cuanto a la formulación de preguntas para los candidatos, estas fueron elaboradas por universidades y colegios de abogados, en presencia de un notario de fe pública. Conforme a reportes de veedurías nacionales, se ha expresado *que* “se evidenció que los sobres enviados por estas instituciones contenían preguntas mal formuladas, incompletas, sin relación con los cargos en cuestión, repetidas con códigos diferentes, de difícil interpretación e incluso confusas que inducen a cometer errores”. Tampoco se han verificado los requisitos comunes y específicos en una misma sesión, tal como lo establece el Art. 25 de la ley 1549, de acuerdo con el informe de la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia. Estas deficiencias culminaron en la declaratoria parcial de desierta consignada en el informe final de la Comisión Mixta.

6.3 Carencia de inteligencia emocional y salud mental

En la batería de preguntas (que únicamente se han podido conocer a través de la veeduría de manera presencial) se constata que no existe mecanismo alguno para poder verificar la salud mental de los candidatos.

La inteligencia emocional de un juez es crucial para la administración de justicia. Sobre lo anterior, el jurista Jesús Ángel Arroyo Moreno señaló:

Para que la justicia sea realmente imparcial e independiente, el juez debe actuar por convicción y amar su labor. Debe también tener valentía necesaria para defender sus propias convicciones, sin temor a las consecuencias; pero también sin encasillarse en un criterio equivocado. Es la disposición interior del juez para hacer justicia, para dar a cada quien lo suyo, lo que garantiza una justicia buena y razonable. Sin ello todo es inútil pues, la justicia depende de los jueces (Romero Galván y Rosales, 2020).

Con relación a cómo idealizar a un juez, Piero Calamandrei señaló que:

tan elevada es en nuestra estimación la misión del juez y tan necesaria la confianza en él, que las debilidades humanas que no se notan o se perdonan en cualquier otro orden de funcionarios públicos, parecen inconcebibles en un magistrado (...) Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud, si no quieren que los creyentes pierdan la fe (Calamandrei, 1989).

Sumado a uno de los institutos jurídicos más troncales como es la *sana crítica*⁵.

Téngase presente que, para postular al Consejo de la Magistratura, ni siquiera es necesario ser profesional en derecho. Por lo que la esencia misma de la ciencia jurídica, como parámetro para procurar una administración de justicia efectiva, que, en definitiva, haga prevalecer la paz social, está desnaturalizada y desviada de ese máximo como es el *bienestar judicial*.

Referencias

- Abel Lluch, X. (2015). *Las reglas de la sana crítica*. La Ley, Madrid, 2015.
- Arroyo Moreno, J. Á. (1993). El juez. *Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, (22), 81.
- Atienza, M. (1997). *El derecho como argumentación: concepción y aplicación del discurso jurídico*. Ariel.
- Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).
- Calamandrei, P. (1989). *Elogio de los jueces escrito por abogados* (S. Sentís Melendo, F. Medina Gaijo & Finzi, Trans.). Ediciones Jurídicas Europa América.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dudley, E. (2024). Stressed judges ‘need to be tested for PTSD’. <https://theaustralian.com.au>

5 La sana crítica es un criterio de valoración probatoria que permite al juez evaluar las pruebas con base en la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. Se sitúa entre los sistemas de prueba tasada y la libre convicción, combinando elementos objetivos y subjetivos para garantizar decisiones justas y razonadas. Este principio impone al juez la obligación de fundamentar sus decisiones con argumentos racionales, evitando la arbitrariedad y asegurando que el razonamiento seguido en la valoración probatoria sea verificable y comprensible.

- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Nieva Fenoll, J. (2025). Los sesgos cognitivos y la prueba: huyendo de la intuición del juez. *InDret*, 1(2025), 382-405.
- Peczenik, A. (2008). *On law and reason*. Springer.
- Punset, R. (1992). Principio democrático y validez procedimental de las leyes. *Revista Española de Derecho Constitucional*, Año 12. Núm 35.
- Romero Galván, A. M., & Rosales, C. M. (2020). La inteligencia emocional del juez como un elemento primordial para la impartición de justicia. *Revista Derecho & Opinión Ciudadana*, (8), 134-166. Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Congreso del Estado de Sinaloa. https://iip.congresosinaloa.gob.mx/Rev_IIP/rev/008/005.pdf
- Vásquez, R. (1996). Comentarios sobre algunos supuestos filosóficos del análisis económico del derecho. En *Justicia con Eficiencia*, (33).
- BW Ratings. (s.f.). Cómo funcionan las calificaciones internacionales. <https://www.bwratings.com/noticias/154-como-funcionan-las-calificaciones-internacionales>
- Canal del Congreso. (2025). Senado realiza insaculación de candidatos a elección judicial del CEPJ. <https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticia/senado-realiza-insaculacion-de-candidatos-a-eleccion-judicial-del-cepj>
- Correo del Sur. (2023, 21 de julio). Presupuesto judicial es menor al de ministerios. <https://correodelsur.com/seguridad/20230721/presupuesto-judicial-es-menor-al-de-ministerios.html>
- El Deber. (2024). Calificadora Fitch degrada la calificación crediticia de Bolivia. https://eldeber.com.bo/economia/calificadora-fitch-degrada-la-calificacion-crediticia-de-bolivia_501539/

- El Informador. (2025). Reforma judicial: ¿Qué es insaculación? El proceso que utilizó el Senado para definir a candidatos del Poder Judicial. <https://www.informador.mx/mexico/Reforma-Judicial-Que-es-insaculacion-El-proceso-que-utilizo-el-Senado-para-defir-a-candidatos-del-Poder-Judicial-20250130-0183.html>
- Fundación Construir. (2024). Problemas, vacíos y errores en la preselección de candidatos a judiciales. <https://www.fundacionconstruir.org/monitoreo/problemas-vacios-y-errores-en-la-preseleccion-de-candidatos-a-judiciales/>
- Perplexity AI. (2023). Perplexity [Modelo de búsqueda con inteligencia artificial]. <https://www.perplexity.ai>